

## REPÚBLICA DE COLOMBIA



### RAMA JUDICIAL

### TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN

Medellín, diez (10) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

La Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, integrada por los Magistrados CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES (ponente), VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO y SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE, cumplido el traslado de que trata el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, procede a dictar la sentencia que corresponde en este proceso ordinario de doble instancia instaurado por LEIDY JOHANA VALLEJO VÁSQUEZ contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES -COLPENSIONES-, trámite en el que fue vinculado por pasiva a la menos SARA TORRES VALLEJO representada por curadora *ad litem* y JUAN FELIPE TORRES VÁSQUEZ (Archivo 02) (Radicado 05001-31-05-017-2021-00481-01).

### ANTECEDENTES

Pretende la demandante se condene a Colpensiones al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes con ocasión de la muerte de su compañero permanente Juan Carlos Torres Holguín a partir del 10 de junio de 2021, con las correspondientes mesadas adicionales, los intereses de mora que contempla el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 y las costas procesales.

Como fundamento a sus pretensiones, narró que convivió con Juan Carlos Torres Holguín entre el 14 de junio de 2008 y hasta el 10 de junio de 2021 cuando falleció. El 18 de junio de 2021 elevó petición de la prestación por muerte ante Colpensiones, la que le fue negada por medio de la Resolución SUB 231951 de 2021, por no existir claridad con el requisito de convivencia. Aduce que dentro de

Rdo. 05001-31-05-017-2021-00481-01

esa convivencia que se surtió por más de 5 años y hasta la muerte, se procreó una hija - Sara Torres Vallejo-, nacida el 13 de julio de 2009.

Por medio de auto del 29 de octubre de 2021 se admitió la demanda, y en igual oportunidad se dispuso la vinculación por pasiva de Sara Torres Vallejo y Juan Felipe Torres Vásquez (Archivo 02).

COLPENSIONES dio respuesta al libelo afirmando no constarle los hechos expuestos, con aceptación de la afiliación a la administradora del causante y su fallecimiento, con oposición a lo pedido en razón a la ausencia del derecho pretendido por cuanto dentro de la investigación administrativa adelantada no se corroboró la convivencia exigida por ley. Como medios de defensa propuso las excepciones de fondo de inexistencia de la obligación de pagar pensión de sobrevivientes, inexistencia de la obligación de pagar retroactivo pensional e improcedencia de intereses moratorios, inexistencia de la obligación de intereses moratorios, buena fe de Colpensiones, prescripción, compensación e imposibilidad de condena en costas (Archivo 07).

Por medio de declaración extra juicio arrimada por Juan Felipe Torres Vásquez y presentada ante el Notario Único de Copacabana el 04 de abril de 2022 (Archivo 22), adujo no estar interesado en acudir al trámite procesal y no estar acreditados de su parte los requisitos de ley para ser beneficiario de la prestación por muerte de su padre.

La menor Sara Torres Vallejo por su parte, por intermedio de curadora *ad litem* que fuere designada por el Juzgado, arrimó escrito de respuesta donde adujo no contarle ninguno de los fundamentos fácticos de la demanda, con la afirmación de no cumplir la demandante con las exigencias de ley para acceder a la pensión de sobrevivientes. Formuló como excepciones de mérito las de carencia para pedir, cobro de lo no debido y mala fe (Archivo 16).

Surtido el trámite de rigor, por medio de providencia emitida el 21 de septiembre de 2022 el Juzgado Diecisiete Laboral del Circuito de Medellín DECLARÓ que la demandante tiene derecho a la pensión de sobrevivientes con ocasión del fallecimiento de su compañero permanente en un porcentaje del 50%. CONDENÓ a Colpensiones a reconocer y pagar la mesada pensional a partir del 10 de junio

de 2021 a partir de 13 mesadas anuales, cuyo retroactivo calculado al 31 de agosto de 2022 asciende a \$11.668.241, debiendo reconocer a partir del 01 de septiembre de 2022 una mesada de \$764.693, con autorización de los descuentos por salud. CONDENÓ a Colpensiones a los intereses moratorios a partir del 19 de agosto de 2021, y a las costas, fijando las agencias en derecho en la suma de \$1.000.000.

La mandataria judicial de Colpensiones interpuso recurso de apelación señalando apartarse de la decisión en lo que atañe a los intereses moratorios, en tanto considera que existieron evidentes inconsistencias en la investigación sobre la convivencia de la pareja en razón a la declaración del hijo del causante y las personas entrevistadas, de donde surgieron serias dudas para la entidad, estando entonces en su momento plenamente justificada la negativa del derecho a la demandante y en ese orden pretende la revocatoria de esta condena.

Por su parte la curadora *ad litem* de la menor Sara Torres Vallejo, adujo que debe examinarse la calidad de compañera permanente, que se prueba con declaración ante notario, expresando la voluntad de conformar una familia de manera permanente, de donde se supone una buena fe, brillando por su ausencia tal documento -SL5524-2016-, falla probatoria que a su juicio determina que la única beneficiaria es la hija Sara Torres, a quien debe reconocérsele el 100% de la prestación.

La Sala en el marco de lo que regula el artículo 69 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, conoce igualmente del asunto por el grado de consulta en favor de Colpensiones sobre los puntos no recurridos.

En el término pertinente, las partes presentaron sus alegaciones de segunda instancia, con argumentos semejantes a los expuestos en las etapas procesales transcurridas en primer grado.

### CONSIDERACIONES

No es tema de discusión al interior del plenario que el señor Juan Carlos Torres Holguín falleció el 10 de junio de 2021 (Pág. 24 Archivo 01), dejando causado el derecho a la pensión de sobrevivientes, en razón de haber cotizado dentro de los

3 años anteriores a la muerte 140.6 semanas (Págs. 355-390 Archivo 07). Que procreó dos hijos, Sara Torres Vallejo y Juan Felipe Torres Vásquez, primera a la que le fue reconocida la pensión de sobrevivientes por medio de la Resolución SUB 231951 de 2021 en un 50%, dejándose en suspenso el restante 50% por la necesidad de verificar el derecho de Juan Felipe Torres (Págs. 52-68 Archivo 01).

De cara a lo anterior, y atendiendo los argumentos de la alzada y el grado de consulta en favor de Colpensiones, el problema jurídico a resolver por esta Sala de Decisión se circunscribe a establecer, si la solicitante acreditó en debida forma el requisito de ley de convivencia que la haga beneficiaria de la pensión de sobrevivientes perseguida en razón al óbito del afiliado Juan Carlos Torres Holguín acaecido el 10 de junio de 2021. Definida esa situación jurídica, se analizará las condiciones en las que debe ser concedida la prestación, los intereses moratorios y las costas procesales a cargo de Colpensiones.

Pues bien, para resolver el asunto se tiene que la normatividad aplicable acorde a la teoría del hecho causante es la vigente al momento en que acaeció la contingencia asegurada por lo que al haber ocurrido el deceso el 10 de junio de 2021, debe aplicarse lo que dispone el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003 para definir el derecho a la pensión de sobrevivientes deprecada, que señala los beneficiarios de la prestación, indicando textualmente lo siguiente de cara al tema:

*“a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera permanente o supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga 30 o más años de edad. En caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y haya convivido con el fallecido no menos de cinco (5) años continuos con anterioridad a su muerte;*

*b) En forma temporal, el cónyuge o la compañera permanente supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga menos de 30 años de edad, y no haya procreado hijos con este. La pensión temporal se pagará mientras el beneficiario viva y tendrá una duración máxima de 20 años. En este caso, el beneficiario deberá cotizar al sistema para obtener su propia pensión, con cargo a dicha pensión. Si tiene hijos con el causante aplicará el literal a).*

*... d) A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente e hijos con derecho, serán beneficiarios los padres del causante si dependían económicamente de este.”*

Así, para la cónyuge o compañera permanente que pretenda ser beneficiaria de una pensión de sobrevivientes debe demostrar de manera cierta y convincente la convivencia por un espacio de 5 años con el causante, independientemente de sea un afiliado o un pensionado, en concordancia con lo definido por la SU 149 de 2021, que se opuso a la postura jurisprudencial de la H. Corte Suprema de Justicia -Sala de Casación Laboral- que determinó como verdadero alcance del literal a) del art. 13 de la Ley 797 de 2003 a la luz del precepto constitucional de favorabilidad, *in dubio pro operario*, que el tiempo de convivencia mínima de cinco (5) años, solo es exigible en caso de muerte del pensionado (Ver SL1730-2020 reiterada en SL3843-2020, SL3785-2020, SL4606-2020, SL489-2021, SL362-2021, SL1905-2021, SL2222-2021 y SL5270-2021); con el argumento de violar tal decisión directamente los principios de igualdad y sostenibilidad financiera del sistema pensional sin justificación objetiva, y no armonizar con los propósitos de la pensión de sobrevivientes ni con los del requisito de convivencia.

En tal contexto, debe brotar del acervo probatorio que existió con Leidy Johana Vallejo y el difunto Juan Carlos Torres una convivencia ininterrumpida y permanente de por lo menos 5 años anteriores a su muerte, entendida esta como la *“comunidad de vida, forjada en el crisol del amor responsable, la ayuda mutua, el afecto entrañable, el apoyo económico, la asistencia solidaria y el acompañamiento espiritual, que refleje el propósito de realizar un proyecto de vida de pareja responsable y estable, a la par de una convivencia real efectiva y afectiva- durante los años anteriores al fallecimiento del afiliado o del pensionado”* ( Ver SL3813-2020 y SL5540-2021 que traen a colación la SL1399-2018).

Al respecto, se cuenta con la documental que pasa a enunciarse. Se aporta constancia de la entrega a la demandante una vez ocurrida la muerte, del ahorro programado del cliente Juan Carlos Torres por parte de la Cooperativa Financiera CFA (Pág. 9 Archivo 01), y de las prestaciones sociales causadas y no pagadas al difunto en un 50% en su calidad de compañera previo aviso de prensa publicado por la empleadora Ingeomega Ingenieria (Págs 12-13 Archivo 01); se allega una constancia de haber figurado el fallecido como codeudor de la demandante dentro del almacén *“hogar y moda”* para el año 2018 (Pág. 33-34 Archivo 01); el

certificado de acompañamiento de la señora Vallejo al señor Torres a un procedimiento anestésico para cirugía por ruptura de LCA y lesión meniscal el 18 de mayo de 2021 (Págs. 35-37 Archivo 01); la autorización de cremación de Juan Carlos Torres Holguín expedida por Leidy Johana Vallejo el 10 de junio de 2021 (Pág. 38 Archivo 01); el acta de entrega de las cenizas de Torres Holguín a la señora Vallejo (Pág. 39 Archivo 01); la constancia del presidente de la acción comunal urbanización el recreo, que dio cuenta de haber residido allí Juan Carlos y Leidy Johana junto con su madre e hija desde 5 años atrás al 26 de septiembre de 2021 (Pág. 40 Archivo 01); la calidad de cónyuge registrada ante Comfama y Comfenalco por cuenta del afiliado Juan Carlos Torres para 2011, 2012 y 2017 (Págs. 41 y 42 Archivo 01); el consentimiento informado para fisioterapia suscrito por Leidy Johana el 08 de junio de 2021 (Pág. 43 Archivo 01); el relato de la IPS Fisinova S.A.S respecto del acontecimiento de la condición médica de Juan Carlos Torres ocurrida en servicio de fisioterapia que luego desencadenó la muerte, donde se alude que era su esposa la acompañante (Págs. 44-45 Archivo 01), el certificado de afiliación a la EPS Sura de la demandante como beneficiaria en calidad de compañera permanente a partir del 20 de octubre de 2017 (Pág. 47 Archivo 01); y el formulario de afiliación a la EPS Sura diligenciado por el fallecido el 20 de octubre de 2017 donde figura la señor Leidy Johana como su beneficiaria junto con su hija Sara Torres (Págs. 49-51 Archivo 01).

Lo anterior se constituye en prueba indiciaria importante para pregonar la calidad de compañera permanente que alega la señora Leidy Johana Vallejo frente al causante en los términos que la norma de seguridad social lo exige, punto en el que es de transcendencia precisar, conforme a los argumentos de la curadora *ad litem* de la menor vinculada, que no es necesaria sentencia que declare la unión marital o declaración extrajuicio que provenga del fallecido para reconocer la sustitución pensional, en tanto las administradoras no pueden establecer condiciones adicionales a las establecidas en la ley para acceder al reconocimiento de una prestación económica (Ver T176-2022), acotación que resulta importante en la medida en la que los cuestionamientos planteados por la curadora no se relacionan con el cumplimiento en sí mismo de los requisitos establecidos en el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, esto es, existencia de vida marital y la acreditación de cinco años de convivencia continuos con anterioridad a la muerte del causante.

Es de ese modo que debe definirse que ese requisito de tiempo se haya configurado para pregonar en la demandante su condición de beneficiaria de la prestación.

Para ese fin, la promotora de esta acción judicial allegó como prueba la testimonial de WILLIAM DARÍO VELÁSQUEZ ÁLVAREZ, MARTÍN LÓPEZ PÉREZ y HENRY ALBERTO MAYA HERRERA amigos y vecinos de la pareja, testigos que coincidieron en advertir que la convivencia de la pareja surgió en el Municipio de Copacabana - Antioquia desde antes de 2012, a partir de cuando les consta a los señores Velásquez y Maya vivían como pareja y bajo el mismo techo junto con su hija Sara Torres Vallejo y la madre de la actora Yolanda Vásquez además que por un tiempo cercano a los 3 años estuvo allí viviendo el hijo del fallecido Juan Felipe Torres. Que luego, se trasladaron de residencia en el año 2017 al “*recreo*” en igual municipio donde finalizó sus días Juan Carlos Torres, aseverando los deponentes que los esposos como eran conocidos nunca tuvieron una separación, sin desconocimiento de diferencias de las que toda pareja enfrenta, con la precisión de estar muy constante el señor Juan Carlos en la casa de su madre por cuestiones de salud que le debía asistir, pero que siempre retornaba a su hogar con Leidy y Sara, siendo este su lugar de domicilio permanente. Señalaron que los gastos fúnebres fueron cubiertos por un plan exequial y que las mismas y el osario estuvieron por cuenta de Leidy Johana a quien le entregaron las cenizas. Relató el señor William Darío que mantenía en constante comunicación con el occiso con quien compartía mucho, y que el día de la muerte salió de su casa donde vivía con Leidy y su hija a la terapia, de donde no regresó.

Así, lo que puede extraerse de las probanzas analizadas en todo su conjunto, es que la pareja conformada por Leidy Johana Vallejo y Juan Carlos Torres estaba conformada, no en desarrollo de una relación pasajera e informal, sino como una familia vista ante toda la sociedad como tal, con el ánimo de permanencia y estabilidad, incluso, ante la fuerza de las circunstancias de la madre del fallecido que imponía su presencia constante, con lo que no se desvirtúa la convivencia alegada, en tanto los testigos dejaron claro que si bien dedicaba tiempo a su madre en sus descansos, era igualmente buen padre y esposo, y retornaba siempre a su casa con su esposa e hija persistiendo el afecto, el respeto, el auxilio mutuo y la asistencia solidaria hasta el último momento de su existencia, no encontrando con suficiencia necesaria, que a más de una separaciones

temporales donde el causante cuidó recaídas de su progenitora, o incluso con peleas cortas de 1 o 2 días en voces del testigo Maya, se presentara el ánimo y voluntad de dar fin al vínculo, pudiendo desprendiéndose por el contrario de los dichos de los deponentes, y sobre todo, de William Velásquez y Henry Alberto Maya que siempre existió sujeción familiar, cuyo vínculo estuvo vivo y actuante hasta la muerte, lo que explica que fuera Leidy Johana quien estuviera presente en las situaciones médicas del fallecido como acompañante, autorizara la cremación de su compañero, recibiera sus cenizas y los pagos que de la muerte se derivaron, con lo que no queda duda dentro de este escenario de su condición para el momento del infortunio, y que venía dándose desde antes del año 2012, que es desde el espacio temporal que los testigos pueden dar fe de la existencia del vínculo y permanencia hasta el 10 de junio de 2021.

Bajo todas las anteriores reflexiones, esta Sala de decisión considera acertada la decisión de la *a quo* cuando encontró adecuadamente probada la convivencia de Leidy Johana Vallejo con Juan Carlos Torres desarrollada entre el año 2012 y hasta el 10 de junio de 2021 cuando ocurrió la muerte, sin que se cuente con vestigios de mayor peso que desvirtúen lo concluido, lo que deriva en el reconocimiento de su calidad de beneficiaria de la prestación por muerte como compañera permanente del causante.

En lo que atañe al monto de la pensión, se tiene que el mismo está definido en \$724.004 que corresponde al 50% de la mesada pensional que se dejó causada, conforme se desprende del acto administrativo que reconoció la prestación a la menor Sara Torres Vallejo (Págs. 52-68 Archivo 01). Ya en cuanto a la fecha de disfrute de la prestación y el valor del retroactivo pensional, ha de señalarse que el derecho se encuentra causado desde el momento en que ocurrió la contingencia, esto es, el 10 de junio de 2021, siendo esta la misma fecha del reconocimiento del derecho, en la medida que no se permitió transcurrir el término trienal de que tratan los artículos 488 del CST y 151 del CPTSS para que opere la prescripción, pues la reclamación ante la sociedad demandada la efectuó la demandante el 18 de junio de 2021, misma anualidad en la que fue presentada la demanda.

En tales términos se tiene que el valor de las mesadas mínimas a pagar desde el 10 de junio de 2021 y hasta el 31 de agosto de 2022 con base en 13 mesadas



anuales por causarse la prestación con posterioridad al desmonte de la mesada 14 - Acto Legislativo 01 de 2005-, corresponde a \$11.668.241 como se detalla a continuación y que coincide plenamente con el valor condenado, monto del que en efecto deben descontarse las cotizaciones para el sistema de seguridad social en salud en atención a los artículos 157 y 203 de la Ley 100 de 1993, 26 del Decreto 806 de 1998 y la jurisprudencia de la H. Corte Suprema de Justicia SL 7061-2016, suma que actualizada al 31 de julio de 2023 en acatamiento al contenido del artículo 283 del CGP asciende a \$21.546.853, debiendo continuarse pagando a partir del 01 de agosto de 2023 una mesada pensional equivalente a \$865.021 sin perjuicio de los incrementos de ley y la mesada adicional de diciembre.

AÑO	VR. MESADA	Nº MES	TOTAL	
2021	\$ 724.004	7 mes y 20 días	\$ 5.550.697	
2022	\$ 764.693	8	\$ 6.117.544	\$11.668.241
2022	\$ 764.693	5	\$ 3.823.465	
2023	\$ 865.021	7	\$ 6.055.147	
		TOTAL	\$ 21.546.853	

Sobre los intereses de mora deprecados, debe partirse del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, el cual establece que en caso de mora en el pago de las mesadas pensionales o el no pago de mesadas dentro del plazo previsto en la ley para el otorgamiento de la pensión, la entidad correspondiente reconocerá y pagará al pensionado, además de la obligación a su cargo y sobre el importe de ella, la tasa máxima de interés moratorio vigente en el momento en que se efectúe el pago.

Para determinar la procedencia de dicho gravamen, dada su naturaleza resarcitoria, debe analizarse la conducta de la administradora en el retardo o negación del reconocimiento o pago de la pensión, ya que, en el evento de demostrarse que su proceder tiene respaldo en las normas que en un comienzo regulaban la situación, su postura proviene de la aplicación minuciosa de la ley sin el alcance que puedan darle los jueces, sin intervención de situación que le son imposibles de predecir, o cuando el reconocimiento de la pensión obedece a la creación de criterio jurisprudencial, debe exonerársele de los intereses de mora (SL704 de 2013, SL7893-2015 y SL2786 de 2020).

Rdo. 05001-31-05-017-2021-00481-01

Bajo las anteriores previsiones, se tiene que Colpensiones si tiene a su cargo esta carga resarcitoria, por cuanto es patente que no está ante ninguna justificación que permitiera para el momento de la resolución del asunto en sede administrativa definir la negativa, encontrando que si la investigación administrativa elevada por el tercero contratado por Colpensiones generaba dudas en la administradora, de donde se desprenden escuetos dichos y declaraciones estructuradas en formatos, debió ampliar su pesquisa para determinar con certeza las condiciones del fallecido y su núcleo familiar, sin que de las conclusiones de ese informe técnico, se deriven afirmaciones concluyentes para haberse negado para septiembre de 2021 la prestación a la demandante, por lo que no resultaba necesaria la intervención judicial para definir el derecho perseguido, que le era propio definir a la administradora

En ese orden, los intereses de mora proceden a partir del 19 de agosto de 2021, como bien lo ordenó la falladora de instancia, que resulta luego de transcurridos los dos meses de los que trata el artículo 1° de la Ley 717 de 2001 a partir de la fecha de la reclamación.

Conforme a todo lo expuesto, y en síntesis, se confirmará la decisión objeto de alzada y consulta por encontrar acreditados los requisitos de ley y ajustadas las costas procesales, por tratarse de una condena objetiva a cargo de la vencida en juicio.

En esta instancia, las costas son a cargo de Colpensiones, y como agencias en derecho se fija la suma de \$1.160.000.

#### DECISIÓN:


En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Quinta de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, **CONFIRMA** la sentencia apelada y consultada, de fecha y procedencia indicadas, precisándose que la condena actualizada a 31 de julio de 2023 asciende a \$21.546.853.

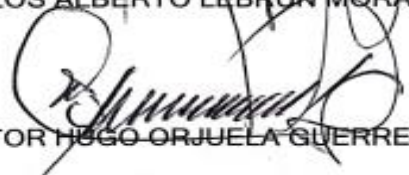
Costas de la instancia a cargo de Colpensiones. Como agencias en derecho se fija la suma de \$1.160.000.


Rdo. 05001-31-05-017-2021-00481-01

Notifíquese la presente decisión por EDICTO (num.3°, lit. d., art. 41 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social en concordancia con el auto 550-2021 CSJ).

Los Magistrados,

  
CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES

  
VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO

  
SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE

Rdo. 05001-31-05-017-2021-00481-01

**REPÚBLICA DE COLOMBIA  
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO  
SALA LABORAL**



**SECRETARÍA  
EDICTO**

El Secretario de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín:

**HACE SABER:**

Que se ha proferido sentencia en el proceso que a continuación se relaciona:

<b>Radicación:</b>	<b>05001310501720210048101</b>
<b>Proceso:</b>	<b>ORDINARIO LABORAL</b>
<b>Demandante:</b>	<b>LEIDY JOHANA VALLEJO VASQUEZ</b>
<b>Demandado:</b>	<b>COLPENSIONES</b>
<b>M. P.</b>	<b>CARLOS ALBERTO LEBRUN MORALES</b>
<b>Fecha de fallo:</b>	<b>10/08/2023</b>
<b>Decisión:</b>	<b>CONFIRMA</b>

El presente edicto se fija por el término de un (01) día hábil, con fundamento en lo previsto en el artículo 41 del CPTSS, en concordancia con el artículo 40 *ibídem*. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

Se fija hoy 11/08/2023 desde las 08:00 am. y se desfija a las 05:00 pm.

**RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS**

Secretario